

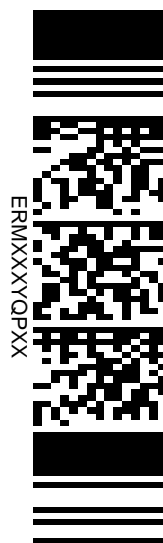
San Miguel, veinticuatro de junio de dos mil veintidós.

**Vistos:**

Por sentencia de dieciocho de abril del año en curso, dictada por el juez suplente del Segundo Juzgado de Letras de Buin, don Emil Andrés Ibarra Sáez, en estos antecedentes RIT T-17-2021, RUC 21-4-0374439-2, se rechazó la excepción de incompetencia deducida por la demandada, Ilustre Municipalidad de Paine, así como la denuncia de tutela laboral interpuesta por don Carlos Agustín Acevedo Gajardo, en contra de la referida entidad edilicia. Además, se acogió la demanda subsidiaria deducida y, en consecuencia, se declaró la existencia de una relación laboral entre el actor y el municipio, la cual se inició el 26 de enero de 2011 y concluyó el 31 de diciembre de 2020, declarando que el despido de esta última fecha es incausado y sin aviso previo. Producto de lo anterior, se dispuso que la demandada deberá pagar al actor \$391.668 pesos por indemnización sustitutiva del aviso previo, \$3.525.012 pesos por concepto de indemnización por años de servicio y \$1.762.506 pesos por concepto del recargo contemplado en el artículo 168 letra b) del Código del Trabajo. Finalmente, se dispuso que las sumas ordenadas pagar deberán serlo con los respectivos reajustes e intereses.

En contra de la sentencia definitiva precitada, el abogado Sebastián Toledo García, en representación del actor, interpuso recurso de nulidad, invocando como causales las contempladas en los artículos 477 y 478 letras e) y b) del Código del Trabajo, solicitando, en definitiva, que se anule el fallo y se *“dicte otra sentencia de reemplazo, que dé lugar al recurso de nulidad por los vicios e infracciones referidas [sic] y acceda las peticiones concretas que se han hecho respecto de cada una de las causales invocadas, esto es, que anule la sentencia y dicte sentencia de reemplazo, que acceda a todas las declaraciones y prestaciones ya señaladas en el presente recurso”*.

Por su parte, la abogada Daniela Francisca Caro Vargas, en representación de la Ilustre Municipalidad de Paine, dedujo el mismo arbitrio procesal, invocando como motivos de invalidación, en forma



principal y subsidiaria, respectivamente, los contemplados en los artículos 477 y 478 letra b) del Código del Trabajo.

Por resoluciones de esta Corte de diecisiete de mayo y tres de junio del corriente, se declararon admisibles los recursos de nulidad por las causales precedentemente señaladas.

En la audiencia del día diecisiete de junio del presente año intervino, por el recurso del actor, el abogado Sebastián Toledo García, y, por el arbitrio de la entidad edilicia demandada, la abogada Daniela Caro Vargas, señalándose que la sentencia se notificaría dentro del plazo que la ley prevé.

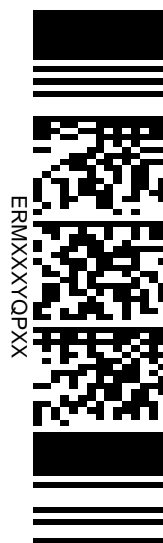
**Con lo oído y considerando:**

**I. Recurso de nulidad interpuesto por Carlos Agustín Acevedo Gajardo.-**

**Primero:** Que el demandante, para fundamentar el arbitrio procesal que deduce, secciona la sentencia impugnada en cuatro partes, invocando por cada una de ellas, en forma subsidiaria, causales distintas, como si se tratara de recursos independientes, sin indicar la forma en que se interponen los motivos que se aducen, respecto de uno de los acápites, en relación con los restantes.

**Segundo:** Que, en efecto, en primer término, la demandante impugna la decisión del *a quo* en cuanto a la fecha de inicio de la relación laboral, la que, de conformidad con lo señalado en el basamento undécimo del fallo en alzada, existió *“a lo menos desde el 26 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2020, percibiendo como última remuneración la suma ascendente a \$391.668 pesos, prestando sus servicios en dependencias de la municipalidad, con una jornada de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 horas, con una hora de colación y recibiendo instrucciones del alcalde o del departamento de Aseo y Ornato”*.

Invoca respecto de esta decisión del tribunal del fondo, como causal principal de invalidación, la contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, por haberse dictado la sentencia con infracción del artículo 9° del referido estatuto laboral, pues *“la falta de contrato escrito hará presumir legalmente que son estipulaciones del [mismo]*



*las que declare el trabajador, y habiendo declarado esta parte que el demandante comenzó a prestar servicios el 02 de enero del año 2009, y habiendo el tribunal constatado el vínculo laboral, el tribunal teniendo esta norma, no la aplicó, y arbitrariamente declaró que el vínculo de naturaleza laboral comenzó el 2011, sin valorar toda la prueba, y sin aplicar esta norma, la cual justamente lo facultaba a declarar el inicio de la relación en enero de 2009, ya que la demandada jamás escrituró el contrato de trabajo, y en consecuencia tenía toda aplicación la norma en comento, para declarar el inicio de la relación laboral en la fecha en que esta parte declaró, y al no hacerlo cometió una infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo”.*

En subsidio de la anterior, invoca la causal contemplada en la letra e) del artículo 478 del Código del Trabajo, por haberse dictado la sentencia con omisión del requisito establecido en el numeral 4° del artículo 459 del mismo cuerpo normativo, esto es, el análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esta estimación.

Señala que el juez del mérito *“no valoró [...] el documento N° 2 incorporado por [su] parte, denominado: Contrato de prestación de servicios personales a honorarios de fecha 02-01- 2009, celebrado entre Don Carlos Acevedo Gajardo y la Ilustre Municipalidad de Paine, más aprobación de contrato de prestación de servicios a honorarios de fecha 02-01-2009, más memo 67-2009 de fecha 27-01-2009, más memo 24-2009 de fecha 20-01-2009, memorándum 11-2009 y memorándum 10-2009, documentos que señalan en forma clara que el denunciante don Carlos Acevedo, comenzó a prestar servicios para la denunciada con fecha 02-01-2009, con duración de aquel contrato hasta el 31 de diciembre de 2009”.* Añade que tampoco dio valor probatorio el tribunal de primer grado *“al hecho de la no concurrencia a absolver posiciones de parte del representante legal de la municipalidad, no aplicando, como se le pidió, el apercibimiento legal señalado en el artículo 454 N° 3 del Código del Trabajo. [...] no siendo válida la simple omisión sobre dicha prueba, ya que su no apreciación, sin justificación alguna deviene en una decisión arbitraria, que*

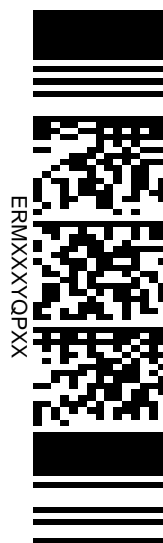


*justamente arbitra que se anule dicho fallo, en razón de no valorarse esa prueba en favor de [su] parte”. Agrega que tampoco valoró el tribunal del fondo “la documental N°20 incorporada por [su] parte, denominado: Certificado emitido por el alcalde don Diego Vergara, acreditando idoneidad y antigüedad laboral del denunciante., pues dicho documento, justamente atingente al punto en comento, señala en forma expresa lo siguiente: “...Carlos Acevedo Gajardo, RUT 5.145.404-9....lleva trabajando en el municipio por espacio de 11 años, y puedo dejar constancia que se trata de una persona seria, humilde, esforzada, muy trabajadora, y que es de mi entera confianza”. Finalmente, arguye que el sentenciador de la instancia no habría valorado “la declaración de la testigo de [su] parte doña Paula Cornejo del Solar, quien preguntada sobre el punto señaló como consta en el minuto 23:59 del audio, a la pregunta de ¿si sabe o conoce cuándo empezó don Carlos a trabaja en la municipalidad?, esta declaró: más o menos, yo creo como el año 2009 o 2010, 2009 parece, lo anterior es concordante con el testimonio de doña Rosario del Landere, jefa de Aseo y Ornato del municipio, quien es citada por el mismo tribunal en el considerando noveno, cuando señala: “... Agregó que el actor trabajaba en el municipio desde 2011 o 2009, 2010, que tiene unos 70 años y que dejó de trabajar después de la pandemia, el 2019”.*

Por último, en subsidio de la causal de nulidad precedentemente señalada, invoca la contemplada en la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, por haber sido pronunciada la sentencia con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, pues, de conformidad con los documentos que indica, *“no existe ninguna regla de la lógica que permita concluir como lo hizo el juez de la instancia, así sin más, que el inicio de la relación laboral es enero de 2011, y el término diciembre de 2020”*. Asimismo, arguye que, para acreditar la fecha de inicio de la relación laboral, su parte rindió la documental que indica, pidió la aplicación del apercibimiento legal por no comparecencia del representante legal del municipio a absolver posiciones, rindió prueba



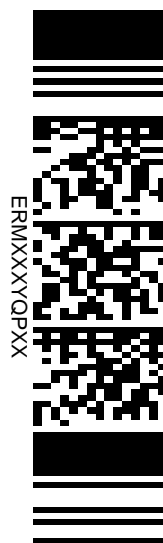
testimonial de doña Paula Cornejo del Solar, mientras que “la demandada no rindió ninguna prueba relevante a este respecto, incluso en [la] diligencia de absolución de posiciones de [su] representado, este fue claro en reiterar que comenzó a trabajar en la municipalidad en enero del año 2009”, por lo que “hay antecedentes de que el demandado sí presto servicios antes de 2011”, lo que “da cuenta que la lógica no está del lado del juez a quo a fin de respaldar su decisión de declarar que la relación laboral comenzó el año 2011”. Esgrime a continuación que “el juez infringe el principio de la razón suficiente por cuanto en la causa constan 2 testimonios que afirman que el demandante comenzó a trabajar antes del 2011, como lo son el testimonio de doña Paula Cornejo, y de doña Rosario de Landerel, que son contestes ambos en algo elemental, que es que la relación laboral comenzó antes de 2011, en el caso de doña Paula lo dijo expresamente en el minuto 23:59 del audio, a la pregunta de ¿si sabe o conoce cuando empezó don Carlos a trabaja en la municipalidad?, esta declaro: más o menos, yo creo como el año 2009 o 2010, 2009 parece, lo anterior es concordante con el testimonio de doña Rosario del Landerel, jefa de Aseo y Ornato del municipio, quien es citada por el mismo tribunal en el considerando noveno, cuando señala: “... Agregó que el actor trabajaba en el municipio desde 2011 o 2009, 2010, que tiene unos 70 años y que dejó de trabajar después de la pandemia, el 2019”, dicho lo anterior, y lo señalado en el párrafo anterior respecto a la documental del Alcalde Diego Vergara y el contrato a honorarios del 2009, quedo establecido en consecuencia la fecha de inicio de la relación laboral fue antes de 2011, y el juez pasando por alto con todo lo anterior, y contradiciendo toda la prueba recién señalada, declara 15 que la relación laboral comienza el 2011, lo anterior, no se condice en consecuencia con la lógica al llegar a esa deducción”. En fin, para sustentar esta tercera causal de nulidad arguye la demandante que el juez del fondo no aplicó el apercibimiento del numeral 3° del artículo 454 del Código del Trabajo, al no comparecer a la audiencia la demandada, no obstante haber sido llamada a confesar. Concluye que “el juez infraccionó las reglas de la



*sana crítica al valorar la prueba, y concluir arbitrariamente que el inicio de la relación laboral es enero del 2011, y no en enero de 2009, como [su] parte lo postuló, infraccionando los principios rectores de este sistema probatorio en los términos [...] y haciendo consecuentemente que no se acceda a las prestaciones demandadas en forma íntegra, ya que las mismas solo se contabilizaron desde 2011, y no desde 2009, disminuyendo las prestaciones demandadas consistentes en la indemnización por años de servicio, el recargo legal aplicado sobre la indemnización por años de servicio [...], feriado legal, valores que se vieron disminuidas respecto a los montos demandados [...]*”.

**Tercero:** Que, en segundo lugar, en este seccionamiento que efectúa el actor de la sentencia impugnada, invoca dos motivos de invalidación del fallo en alzada respecto de la decisión del tribunal del mérito de rechazar la indemnización demandada por concepto de feriado legal, consignada en el basamento decimonoveno, en “*atención a su indeterminación*”.

Aduce como motivo principal de nulidad el del artículo 477 del Código del Trabajo, “*dado que la sentencia ha sido pronunciada con infracción sustancial de ley y de derechos y garantías constitucionales que han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo [...], ya que el juez rechaza la prestación, estando absolutamente facultado para haber fijado el monto correcto de feriado legal al que tenía derecho mi representado, infraccionando las normas de los artículos 67, 71 y 73 del Código del Trabajo, que señalan la procedencia, forma y pago de la prestación de feriado legal en sus diferentes hipótesis*”. Expresa en su libelo recursivo que “*[e]n la causa y en el fallo constan las remuneraciones de [su] representado año a año, estableciendo el juez a quo el monto de la última remuneración, la cual sirve de base para el cálculo de las indemnizaciones derivadas del término del contrato de trabajo que unía a las partes (Considerandos décimo letra C, y considerando undécimo, inciso 2°), esto es la suma de \$391.668, el juez tenía todos los elementos para, en el caso de no estar de acuerdo con el monto que [su] parte pedía por feriado legal, haber él calculado*

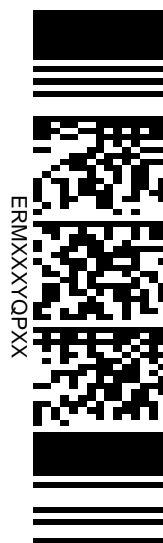


*el monto, y no haberse lavado las manos rechazando la prestación demandada, aferrándose a una supuesta indeterminación del cálculo del monto demandado, y así rechazar la prestación [...]”.*

En subsidio de la causal anterior, invoca la de la letra e) del artículo 478 del estatuto laboral, por contener el fallo, en su opinión, decisiones contradictorias, ya que el tribunal reconoció la existencia de relación laboral y, en consecuencia, el derecho del trabajador a las prestaciones derivadas del término de contrato, entre ellas el feriado legal, pero *“no condena a la misma prestación ya señalada, lo anterior, hace que la contradicción sea evidente, y no puede ser salvada como lo argumenta el juez a quo en una supuesta indeterminación”,* no pudiendo, por una parte, *“declarar la existencia de una relación laboral, y consecuencialmente reconocer el derecho de [su] representado a las indemnizaciones por término de contrato”,* y, por la otra, sostener que *“a [su] representado no se le puede indemnizar el feriado legal, teniendo todos los elementos, para que con una simple operación aritmética determinar dicho monto si no estaba de acuerdo con el señalado por [su] parte, al decidir como lo hizo reconociendo relación laboral, pero no condenando a la demandada al feriado legal, incurre en una evidente contradicción, que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, al negar la condena a la demandada por el feriado legal demandado”.*

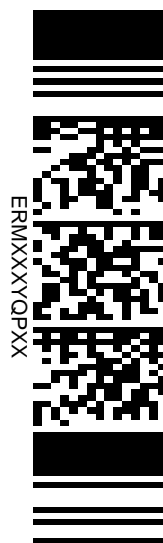
**Cuarto:** Que, en tercer término, en relación con el rechazo de la acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales, fundada en el despido del actor en atención a su edad —75 años—, invoca tres causales, siendo la principal la del artículo 447 del Código del Trabajo, y, subsidiarias, las de las letras e) y b) del artículo 478 del mismo cuerpo normativo.

En cuanto a la *“infracción sustancial de ley y de derechos y garantías constitucionales que han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”,* arguye la recurrente que *“se señalaron 4 indicios de la vulneración de derechos que sufrió el denunciante”,* los que *“fueron totalmente acreditados con la prueba indiciaria que se acompañó al libelo que da origen a la causa”,* por lo que *“es*



*incompresible cómo el juez rechazó la denuncia de vulneración de derechos fundamentales, pasando por alto la norma señalada en el artículo 493 de Código del Trabajo, por la cual, habiéndose acreditado los indicios de la tutela alegada, y no habiendo justificado el denunciado las razones de su decisión ni su proporcionalidad, no cabía más que tener por acreditada la denuncia de tutela laboral". Indica que el juez del fondo "solo se limite a rechazar la tutela en atención a la confesional del denunciante, en la cual hace alusión a otros trabajadores mayores de edad de la municipalidad que sabe volvieron a trabajar al municipio, sin hacerse cargo que esa declaración fue en relación al conocimiento general del trabajador, jamás lo dijo circunscrito a sus labores propias como único jardinero de la municipalidad de Paine, por lo anterior, el juez desecho la demanda de tutela laboral, solo por esa declaración, la cual fue erróneamente entendida, ignorando toda la demás prueba rendida, y peor aún, ignorando que [su] parte solo debía probar indicios, y que los probó, y la denunciada no justifico los fundamentos ni la proporcionalidad del despido discriminatorio que se alegaba, vulnerándose en forma evidente el artículo 493 del Código del Trabajo".*

Como se ha dicho, en subsidio de la causal anterior, invoca la contemplada en la letra e) del artículo 478 del Código del Trabajo, por haberse omitido, en opinión de quien recurre, el requisito contemplado en el numeral 4° del artículo 459 del referido cuerpo legal, es decir, el análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esta estimación. Expresa que *"el juez a quo no dio ningún valor al hecho de la no concurrencia a absolver posiciones de parte del representante legal de la municipalidad, no aplicando, como se le pidió el apercibimiento legal señalado en el artículo 454 N° 3 del Código del Trabajo [...]".* Además, arguye que *"la sentencia recurrida interpreta erróneamente la prueba de absolucón de posiciones rendida por el denunciante",* que fue la única *"que inclinó al juez a quo a rechazar la denuncia de discriminación que sufrió [su] representado",* al estimar que no se acreditó



fehacientemente “que el reemplazo de las funciones del actor haya sido en razón de su edad, lo que impide tener por acreditado el indicio fundamental que sostiene la acción de vulneración reclamada, ante lo cual se rechazará la demanda de vulneración de garantías fundamentales con ocasión del despido”. Sin embargo, la recurrente aduce que “el absolvente jamás dijo que una persona de su misma edad lo reemplazó después del despido en su mismo lugar de trabajo, como el juez a quo entendió del testimonio, cuando se le pregunta insistentemente si había otros trabajadores del municipio que por el COVID estuvieron en sus casas con goce de sueldo al igual que él, se refieren a la generalidad del municipio, nunca se refiere la pregunta ni la respuesta del absolvente al caso específico de él, si no que a la generalidad del municipio, donde fácilmente trabajan en el municipio más de 50 personas, de hecho, en la confesional declara expresamente que quien lo reemplazó en sus labores de jardinero del municipio fue el señor Ángel Reyes Reyes, quien como está probado en autos tiene 31 años”. En fin, señala que el juez a quo no habría analizado la documental consistente en “Resolución Concurso Público” donde se escoge formalmente a don Ángel Reyes Reyes como “Planta auxiliar Grado 18”, realizando, las que eran [sus] funciones en la municipalidad, y “Certificado de nacimiento [de aquel], donde se acredita que tiene solo 31 años”, ni valorado “el no cumplimiento de la exhibición de documentos, referida a [...] Descripción de cargos de Ángel Reyes Reyes [...] y sus respectivas obligaciones funcionariales, a pesar que se pidió la aplicación del apercibimiento señalado en el artículo 453 N°5 del Código del Trabajo [...]”.

En fin, en subsidio de la causal de nulidad analizada con antelación, invoca la de la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, por haber sido pronunciada la sentencia con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, al rechazar la denuncia de tutela laboral, infracción que se manifestaría en los considerandos decimoquinto y decimosexto del fallo *sub iudice*, “en los cuales tiene por acreditados



ERMXXXYQPPXX

los indicios de la discriminación sufrida por [su] representado, pero rechaza la demanda con el único argumento de que: "...Sin embargo, también se tiene presente la declaración del mismo denunciante, quien al absolver posiciones indicó que supo de más personas en sus mismas condiciones que por la pandemia fueron enviados a la casa, desconociendo si se le pagaban sus honorarios de forma íntegra. Dichas personas tenían una edad similar a la de él, e inclusive había alguien de 80 años, desconociendo si todos continuaron prestando servicios, salvo una persona que prestaba las mismas funciones que él y que la habría visto trabajando alrededor de la municipalidad". Razona el recurrente que "el juez solo rechazó la tutela por la absolución de posiciones de don Carlos Acevedo, de la cual entendió [...] que una persona de su misma edad, lo reemplazó en sus mismas labores en la municipalidad, lo anterior es erróneo, ya que el absolvente jamás dijo eso, y esa conclusión no se condice con toda la prueba rendida en el juicio, en especial el juez vulnera en forma flagrante al fallar como lo hizo el principio de no contradicción". Además, señala que "constituye una máxima de la experiencia la dificultad que impone para el denunciante la acreditación plena de una denuncia de vulneración de derechos fundamentales, en razón de lo anterior se estableció para estos casos el sistema de prueba indiciaria, y como fundamento de los indicios de despido discriminatorio en razón de la edad del denunciante se presentó su certificado de nacimiento que acredita que tiene 75 años, se acompañó sus boletas de honorarios y contratos de honorarios que daban cuenta de su antigüedad como jardinero de las dependencias de la municipalidad de Paine, se acompañó el certificado de nacimiento de su reemplazante, y el concurso público donde se acredita su postulación al puesto y a las labores que don Carlos hacía en el municipio como jardinero, dicho lo anterior el fallo recurrido tuvo por acreditado dichos indicios, y no solo eso, la testigo Doña Rosario de Landereel, Jefa de Aseo y Ornato del municipio, y don Esteban Yévenes estuvieron contestes con el hecho de que Ángel Reyes Reyes reemplazó a don Carlos en sus labores de jardinería en el municipio [...]". Por último,

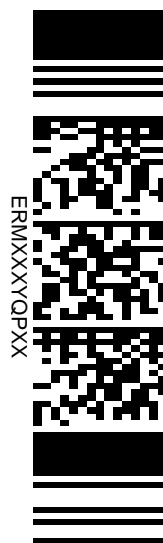


arguye que el supuesto trabajador de 80 años, *“si bien ejercía labores de jardinería como don Carlos Acevedo, el mismo testigo, señala que dichas labores eran de carácter menor, en atención a la avanzada edad del señor”*, mientras que *“las labores que don Carlos Acevedo desempeñaba no eran menores”*, lo que refuerza la existencia de un *“despido discriminatorio por edad del trabajador, en base a la máxima de la experiencia consistente en que, ‘los trabajos que impliquen esfuerzo físico pueden ser desempeñados de manera más eficiente por persona adultas más jóvenes, que por personas de una avanzada edad’”*.

**Quinto:** Que, finalmente, en cuarto lugar, en relación con el rechazo de la acción de nulidad del despido, invoca, como principal, la causal de derecho del artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción de lo dispuesto en los incisos quinto a séptimo del artículo 162 del referido cuerpo normativo, pues *“habiéndose establecido por el tribunal a quo, la existencia de una relación laboral entre las partes, y con ello que la Ilustre Municipalidad de Paine, fue la empleadora de don Carlos Acevedo, corresponde entonces que se condene al pago de las respectivas cotizaciones, por todo el periodo trabajado, como efectivamente lo hizo, y además se condene a pagar las respectivas remuneraciones hasta la convalidación del despido, a riesgo de dejar de aplicar el artículo 162, en los incisos referidos, incurriendo con ellos en la causal de nulidad invocada, con evidente influencia sustancial en lo dispositivo del fallo”*.

**Sexto:** Que, de lo expuesto en los basamentos que anteceden, se aprecia que el arbitrio procesal deducido por el actor en contra de la sentencia en alzada adolece de defectos formales insalvables, que impiden a esta Corte entrar al análisis de fondo de los motivos de nulidad invocados.

En efecto, como se ha señalado, el recurrente divide el fallo impugnado en cuatro partes, cada una relativa a distintas decisiones a que arribó el *a quo*, a saber, fecha de inicio de la relación laboral, rechazo de la petición de indemnización por concepto de feriado legal, rechazo de la acción de tutela y rechazo de la acción de nulidad del



despido, y por cada una de ellas invoca distintas causales, cuales son las contempladas en los artículos 477 y 478 letras e) y b) del Código del Trabajo, salvo en cuanto al rechazo de la indemnización por concepto de feriado legal, respecto del cual aduce solo dos motivos de invalidación, a saber, los de los artículos 447 y 478 letra e) del mencionado estatuto laboral.

En cuanto a la forma de interposición de las causales señaladas, indica la parte demandante, al analizar cada una de las decisiones judiciales que cuestiona, que las deduce en forma subsidiaria, pero nada dice acerca de la forma en que las interpone en relación con los otros acápites en que ha seccionado el fallo para efectos del presente recurso.

Así, verbigracia, la causal que invoca como principal para impugnar la decisión del tribunal del fondo acerca de la fecha de inicio de la relación laboral, esto es, la del artículo 477 del Código del Trabajo, resulta compatible con la argüida como principal con ocasión del rechazo del feriado legal, pues se trata del mismo motivo de invalidación, cuya naturaleza es estrictamente jurídica e importa, para esta Corte, la intangibilidad de los hechos que el *a quo* ha tenido por acreditados en su sentencia. Sin embargo, tal causal resulta incompatible con la de las letras e) y b) del artículo 478 del estatuto laboral, pues la primera supone la aceptación de los hechos y las segundas, un cuestionamiento de los mismos. Por consiguiente, si estimare este tribunal *ad quem* que existe el error *in iudicando* que el recurrente arguye en el acápite relativo a la fecha de inicio de la relación laboral, y lo desestimare, por ejemplo, en el referido al feriado legal, no podría entrar al análisis de las causales subsidiarias de este último, por ser incompatibles con la primera.

**Séptimo:** Que, como ha señalado reiteradamente esta Corte, resulta pertinente tener presente que el recurso de nulidad, según se desprende de las disposiciones en que se contienen las causales que lo hacen procedente, tiene por finalidad, según sea el motivo de nulidad que se haga valer, asegurar el respeto de los derechos y garantías fundamentales o bien, instar por sentencias ajustadas a la



ley, recurso que además, tiene el carácter de extraordinario y de derecho estricto, como queda de manifiesto por la naturaleza de las causales que lo hacen procedente y el fin perseguido por las mismas, y por las formalidades que debe cumplir el escrito respectivo, lo que por otra parte determina el ámbito restringido de la revisión que pueden efectuar los tribunales de alzada, lo que conlleva, además, la obligación de los recurrentes de precisar con minuciosidad los fundamentos de las causales que esgrimen y la forma de interposición de estas.

**Octavo:** Que, como se ha indicado precedentemente, al ser un medio de impugnación de derecho estricto, el tribunal no puede suplir las deficiencias en el planteamiento del recurso de nulidad, de manera que, al seccionar el impugnante la sentencia en alzada e invocar por cada una de esas partes causales diversas, como si se tratase de recursos independientes entre sí, sin indicar la forma en que los motivos de invalidación de una de esas secciones se interponen en relación con los de las otras, impiden a esta Corte un análisis del fondo de las causales esgrimidas, desde que suponer, por ejemplo, que lo fueron en forma conjunta significaría, por un lado, señalar que los hechos cuestionados en uno de los acápites fueron incorrectamente establecidos, y por otra, tener que dejar inamovibles los hechos establecidos en la sentencia en cuanto a los otros, lo que constituye una contradicción evidente, inaceptable e insalvable, dejando al tribunal sin competencia para resolver una en subsidio de la otra.

Asimismo, si se estimare que los motivos de invalidación invocados en un acápite fueron interpuestos subsidiariamente a los esgrimidos en los restantes, tampoco podría esta Corte entrar a un análisis del fondo, desde que no ha señalado el recurrente cuál de ellos fue interpuesto como principal, pues los ha desarrollado independientemente unos de otros, como si se tratara de arbitrios distintos.



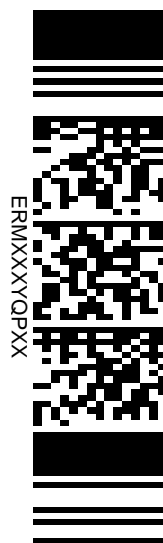
Así las cosas, tal error en la formulación del recurso de nulidad conduce a que éste debe ser rechazado, por no ajustarse estrictamente a la normativa que lo regula.

**Noveno:** Que, por todo lo anteriormente expuesto, y apareciendo claramente que el recurrente al interponer el recurso no ha dado estricto cumplimiento a las formalidades y obligaciones que le impone el inciso final del artículo 478 del Código del Trabajo, el arbitrio en estudio no puede prosperar.

## **II. Recurso de nulidad interpuesto por la Ilustre Municipalidad de Paine.-**

**Décimo:** Que, como se ha dicho, la causal invocada como principal por la entidad edilicia demandada es la contemplada en el artículo 477 del estatuto laboral, al estimar infringidas las disposiciones contenidas en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, 3 y 40 de la ley N° 18.695, 1, 2, 3 y 4 de la ley 18.883, 2006 y siguientes del Código Civil, y 7 “*y demás pertinentes*” [sic] del Código del Trabajo, “*por cuanto los contratos que vincularon a la demandante [...] con [su] representada [...] tienen un carácter civil, contrato de prestación de servicios personales a honorarios y no laboral y se encuentran enmarcados en la hipótesis del artículo 4° de la ley 18.883*”.

Arguye la recurrente que “*se pudo acreditar que la función realizada por el actor jamás fue de aseo y ornato de la comuna, ya que como lo declaran los testigos el no realizaba labores de jardinería en plazas u otros lugares de la comuna, ya que solo se dedicaba a la mantener una huerta que se encontraba en la Municipalidad y limpiar el frontis del municipio. Por lo tanto, la calificación que realiza el sentenciador como labores habituales y permanentes de conformidad al artículo 3° de la Ley 18.695 es errónea [...]*”. Añade que la relación contractual que unió al actor con su representada fue una de carácter civil y no laboral, “*por lo que la sentenciadora infringe gravemente las disposiciones legales señaladas, obviando el verdadero sentido y alcance de dicha normativa, haciendo prevalecer el Principio de la Supremacía de la Realidad en materia laboral, por sobre las normas*

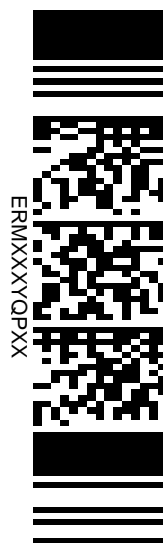


contendidas en la Ley 18.883 Orgánica Constitucional de Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales”.

Más adelante expresa la demandada que el juez del fondo “por el solo hecho que el actor debía emitir las respectivas boletas de honorarios junto a un informe de gestión de sus servicios para poder recibir sus honorarios, lo asimiló a que estaba bajo dependencia y subordinación”, sin considerar que “todos quienes efectúen una prestación de servicios en el sector público, deben justificar los recursos utilizados para sus honorarios, ya que, todo está bajo la Supervigilancia de la Contraloría General de la República y cualquier persona que se desempeñe en un servicio público o privado indistintamente su calidad contractual sea esta civil o laboral debe emitir un informe que justifique su función o labor, no por ello asentaría los presupuestos de la subordinación y dependencia como elementos de la esencia de la relación laboral, como erróneamente lo plasma la sentenciadora”.

En cuanto a la supuesta infracción de lo dispuesto en los artículos 2006 y siguientes del Código Civil, y 7 y siguientes [sic] del Código del Trabajo, expresa que el sentenciador hace un análisis errado de la relación contractual que unió a su representada con el actor, toda vez que “las funciones que cumplía el prestador eran de mantención por lo que claramente no se tipifican [sic] los elementos del artículo 7 del Código del Trabajo, y su prestación de servicios atendida la naturaleza de los servicios públicos debía efectuarse dentro de los horarios de atención de los usuarios [...]”. Refiere que los cometidos de los respectivos contratos a honorarios del actor eran específicos, sin que se encontraran determinados e individualizados y se referían a programas de recuperación, o de regeneración rural o de mantenimiento. [...] En cuanto a la sujeción de jerarquía e instrucciones, queda de manifiesto que [...] no recibía instrucciones porque por su oficio no era necesario indicar qué debía realizar [...].

**Undécimo:** Que, como se ha señalado reiteradamente por esta Corte, la causal invocada como principal por la municipalidad demandada es estrictamente jurídica y supone la aceptación de los



hechos asentados en el fallo impugnado, los que resultan inmodificables para el tribunal de nulidad.

**Duodécimo:** Que, así las cosas, y habida cuenta de lo señalado por el *a quo* en el basamento décimo de la sentencia en alzada, son hechos acreditados en estos autos los siguientes:

a) El actor prestó servicios para la demandada de manera ininterrumpida a lo menos desde el 26 de enero de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2020.

b) Las labores que prestaba el demandante eran de jardinería, mantenimiento de plazas y parques de la municipalidad, variando el lugar de prestación de servicios dependiendo de lo expuesto en cada contrato, pero desempeñando las funciones principalmente en el frontis de la municipalidad.

c) El pago realizado al actor ascendía a una suma constante que variaba aproximadamente año a año, siendo la última remuneración pactada la suma de \$391.668.

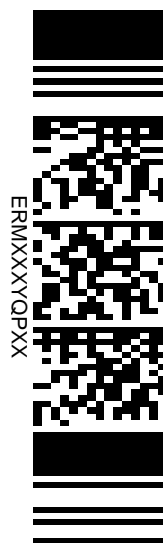
d) Aun cuando se daba cuenta de un pago por un monto único en los últimos contratos, de igual modo se iba pagando mes a mes, previo informe verbal que realizaba el actor de las funciones prestadas, a fin de que la misma municipalidad confeccionara la respectiva boleta de honorarios.

e) Los servicios se prestaban en la misma municipalidad, encargándose principalmente del mantenimiento del frontis de esta.

f) El actor concurría de lunes a viernes desde las 8:30 horas hasta las 19:30 horas, con una hora de colación. Sin embargo, se era condescendiente con él y se le permitía ausentarse ciertos días, previa autorización del alcalde, o llegar más tarde.

g) El actor recibía instrucciones principalmente del alcalde o de la jefa de Aseo y Ornato.

**Decimotercero:** Que, en el basamento undécimo de la sentencia impugnada, el tribunal del mérito analiza la naturaleza de los servicios prestados por el actor, estimando que *“entre las partes existió una relación laboral con las características contempladas en el artículo 7° del Código del Trabajo, toda vez que [...] prestaba servicios*

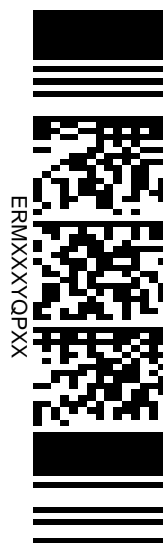


*de mantención de jardines, independiente de la redacción de los servicios a prestar contenida en los diversos contratos suscritos, a lo menos desde el 26 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2020, percibiendo como última remuneración la suma ascendente a \$391.668 pesos, prestando sus servicios en dependencias de la municipalidad, con una jornada de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 horas, con una hora de colación y recibiendo instrucciones del alcalde o del departamento de Aseo y Ornato”.*

**Decimocuarto:** Que, así las cosas, resulta a todas luces evidente que las actividades para las que fue contratado el actor exceden del marco normativo que establece el artículo 4° de la Ley N° 18.883. Para ello, resulta ilustrativa la determinación de labores establecidas en el fallo de base y que se reproducen *supra*, considerando undécimo, por lo que es claro y no puede desconocerse que las funciones que ejecutaba el demandante se corresponden con lo que el artículo 7° del Código del Trabajo asigna a todo vínculo de dependencia directa e inmediatamente regido por él, toda vez que aquellas no pueden incluirse en el concepto de cometido específico, desde que su contratación se llevó a cabo para que prestara servicios en el contexto de ejecución de funciones propias de la entidad edilicia demandada —ornato—, cumpliendo funciones de jardinero, cualificación referida a una labor que integra la estructura institucionalizada o generalmente conocida de las corporaciones municipales.

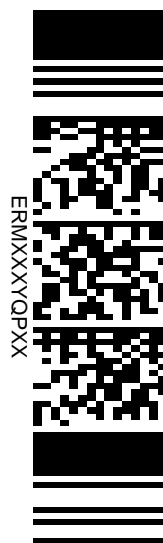
**Decimoquinto:** Que, por consiguiente, resulta que lleva la razón el tribunal del fondo al calificar la relación contractual de autos como amparada por el Código del Trabajo, pues las funciones ejecutadas por el actor son propias, habituales y permanentes de la demandada, ordenadas y reguladas por la normativa que la creó y, en ningún caso, accidentales o ajenas a ella, por lo que correspondía aplicar, como de hecho ocurrió, las normas del referido estatuto laboral.

**Decimosexto:** Que, de lo razonado, no cabe sino desestimar la causal de nulidad invocada como principal por la entidad edilicia demandada.



**Decimoséptimo:** Que, en subsidio de la causal precedentemente analizada, invoca la demandada la regulada en la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, por estimar la impugnante que *“el sentenciador yerra en su conclusión, toda vez que no aplica las normas de la sana crítica, específicamente los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados”,* ya que *“toma en consideración una sola declaración que corresponde a la Directora de la Dirección de Aseo y Ornato”,* sin considerar *“la absolución de posiciones del demandante el cual efectivamente señala que prestó servicios en calidad de honorarios, ejecutando labores de jardineros, que no recibía instrucciones de la Directora de Aseo y Ornato y que ante cualquier necesidad se entendía solo con el alcalde”.* Además, señala que *“hace primar una supuesta tipificación de los elementos de configuración del contrato de trabajo, obviando que dicha prestación se concretó en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 18.883, en concordancia con lo señalado en el Código Civil respecto al arrendamiento de servicios personales, siempre estuvo en conocimiento del verdadero sentido y alcance del vínculo civil que lo unió [con su] representada, no tomando en consideración por todo el tiempo que se extendió dicha contratación a honorarios”.*

En fin, arguye que *“el sentenciador yerra en sus conclusiones, toda vez que no aprecia la totalidad de la prueba, de acuerdo a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados [...], asentando situaciones que al tenor de lo expuesto, declarado y de acuerdo a los elementos de su experiencia como magistrado y funcionario público, omitió al no considerar elementos fundamentales, como que [su] representada es un Institución Pública, que solo y de carácter subsidiaria [sic] se rige por las normas del código del trabajo, como es el caso de sus contrataciones regidas por el artículo 3 de la Ley 18.883 y que no pueden bajo ningún contexto hacer prevalecer las normas de dicho cuerpo legal por sobre las normas estatutarias que rigen los entes edilicios [...].”*

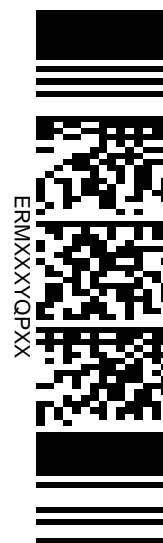


**Decimoctavo:** Que, del examen de la sentencia impugnada, es posible colegir que el tribunal del fondo razona adecuadamente, que es factible reproducir el razonamiento utilizado por él para alcanzar las conclusiones contenidas en el fallo impugnado, sin que se advierta en el proceso de valoración de la prueba vulneración a los principios de la lógica, a las máximas de la experiencia ni a los conocimientos científicamente afianzados.

En efecto, el tribunal del mérito, en el basamento undécimo de la sentencia en alzada y después de exponer profusamente la prueba rendida en los motivos que lo preceden, e indicar los hechos acreditados en el juicio, analiza si entre la entidad edilicia demandada y el actor existió la relación laboral que este reclama. Sostiene, en primer término, que el actor prestaba servicios de mantención de jardines, a lo menos desde el 26 de enero de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2020, percibiendo como última remuneración la suma ascendente a \$391.668 pesos, prestando sus servicios en dependencias de la municipalidad, con una jornada de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 horas, con una hora de colación y recibiendo instrucciones del alcalde o del departamento de Aseo y Ornato.

Por consiguiente, de esta tesitura, no se divisa en el razonamiento del tribunal del fondo infracción a principios de la lógica, a las máximas de la experiencia ni a los conocimientos científicamente afianzados, como sostiene la recurrente, sino que queda en evidencia, de los argumentos vertidos, una diferente valoración de la prueba producida durante el juicio, esto es, al margen de las facultades que la ley confiere al tribunal de alzada para declarar la invalidez de un fallo. Como tal valoración no es la deseada por quien recurre, se señala que ésta no se ajusta a los límites de las normas procesales que se invocan.

Por lo demás, ¿cuáles serían los principios de la lógica vulnerados? ¿El de identidad? ¿El de contradicción? ¿El de razón suficiente? ¿El del tercero excluido? ¿Cuáles las máximas de la experiencia o conocimientos científicos conculcados? Nada ha señalado la recurrente a este respecto, sino que se ha limitado a



indicar, sin fundamentar, que la valoración de la prueba en el proceso no se hizo respetando las reglas de la sana crítica, sin enunciar, específicamente, cuáles serían aquellas que estima conculcadas.

En definitiva, la recurrente pretende que esta Corte haga una nueva apreciación de la prueba rendida o modifique las conclusiones fácticas del tribunal de primer grado, actuaciones que están vedadas a estos sentenciadores por esta vía, desde que los hechos en que se fundamenta la causal que se invoca, no la constituyen.

**Decimonoveno:** Que, por consiguiente, el arbitrio procesal deducido por la demandada ha de ser necesariamente desestimado.

Por estos fundamentos y de conformidad con lo dispuesto en las normas precitadas y en los artículos 479 y 482 del Código del Trabajo, **se rechazan** los recursos de nulidad deducidos por los abogados Sebastián Toledo García y Daniela Francisca Caro Vargas, en representación del actor y de la demandada, respectivamente, en contra de la sentencia de dieciocho de abril del año en curso, dictada por el juez suplente del Segundo Juzgado de Letras de Buin, don Emil Andrés Ibarra Sáez, en la causa RIT T-17-2021, RUC 21-4-0374439-2, la que, por consiguiente, no es nula.

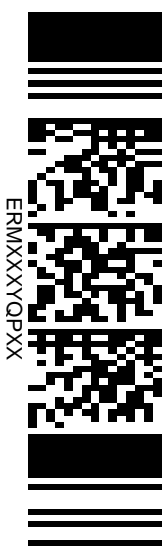
Regístrese y comuníquese.

Redacción del abogado integrante Sr. Misseroni.

ROL 227-2022 Laboral

Pronunciada por la primera sala de esta Corte presidida por el ministro Marcelo Ovalle Bazán e integrada por el fiscal judicial Jaime Salas Astráin y por el abogado integrante Adelio Misseroni Raddatz.





ERMXXXYQPXX

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por Ministro Suplente Marcelo Ignacio Ovalle B., Fiscal Judicial Jaime Ivan Salas A. y Abogado Integrante Adelio Misseroni R. San Miguel, veinticuatro de junio de dos mil veintidós.

En San Miguel, a veinticuatro de junio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

